

Se habló de política

UNA vez más, en la Semana Económica Internacional se habló más de política que de economía. Y si no hubo coincidencia en el diagnóstico económico de la situación actual, si que todo el mundo concluyó —no podía ser menos— que la situación es grave y que sin una salida política poco se va a resolver en el terreno de la crisis.

Auger, que por vez primera sacaba su Semana fuera de Barcelona (con un evidente fracaso de asistencia), enjuició, desde lo que él mismo considera una perspectiva de derechas, las recientes medidas económicas: "El Gobierno pretende lo imposible. Reducir la inflación sin perjudicar al desarrollo resulta algo inalcanzable. El Gobierno usa un lenguaje claro en política. Pero se le traba la lengua en economía".

Tres extranjeros sobrevolaron, sin que se llegara a comprender muy bien su aportación, sobre la Semana: Nicholas Kaldor, Charles Levinson y Vasili Leontieff, premio Nobel. Los dos primeros tocaron un tema que sacó a la audiencia del sopor de la repetición de sus temas tradicionales; porque tanto el profesor de Cambridge como el líder sindicalista británico vinieron a prevenir a España de una integración en el Mercado Común: "Puede que algunos productos españoles encuentren un gran mercado —dijo Kaldor—, pero también se producirá un perjuicio para otros muchos, dominados actualmente por las grandes empresas europeas".

Los españoles, por su parte, ni estaban todos los que son ni son todos los que estaban. La falta de un Tamames, también habitual, año, de las Semanas, o de economistas próximos a su ideología, fue comentada. Algunos de los ponentes bajaban notablemente de la media del conjunto.

Fernández Ordóñez planteó el problema de la ineficaz intervención del sector público en la economía española: "En algunos sectores industriales la ayuda pública crece más rápidamente que el valor añadido". Pero para Fernández Ordóñez,

que había dejado un regusto antiintervencionista en la primera parte de su intervención, lo importante no es que este poder exista, sino conocer sus costes y hacerla funcionar correctamente.

José María Socias Humbert, ex secretario general de la Organización Sindical y uno de los nombres que figuran en la lista de la "operación centro", que se dice promociona el Gobierno, habló del futuro sindical: "Debe partir de unos supuestos previos inevitables de reconocimiento por parte del Estado de las libertades sindicales de reunión, expresión, asociación y huelga".

José María Castañe fue tajante, en una de las ponencias más claras de la semana: "Aceptar que la reforma política debe ser previa a la económica es suicida, porque en el actual estado de cosas unas elecciones son imposibles y los próximos Gobiernos carecerían de la maniobrabilidad suficiente".

El PSOE se presentó en la Semana en dos frentes: la ponencia de Miguel Boyer y la intervención de Felipe González en la cena que se celebró al término de la tercera jornada. Boyer señaló que España no necesita un plan de austeridad, que lo más sensato es una política de defensa del empleo, que el diagnóstico del Gobierno es incorrecto. Felipe González, por su parte, hizo una breve pero aplaudida intervención. Pidió que se llamara a las cosas por su nombre y dijo que, "mientras estemos en un sistema capitalista, habrá que aceptar el despido libre. Pero tal planteamiento será intolerable mientras los trabajadores carezcan de los derechos mínimos de asociación y de huelga". Ariza, de Comisiones Obreras, presente en la misma cena, trató de explicar a los escasos empresarios presentes que el movimiento obrero, cuya movilización para el día 12 anunció, es responsable, que no quiere cargarse la economía y sencillamente reivindica sus derechos, que coinciden con los generales del país. "No nos podemos apretar el cinturón mientras otros no lo hacen". ■



Nicolás Redondo: Los bienes de la UGT.

Valladolid

Solidaridad sindical

APENAS veinticuatro horas antes de la prevista para su celebración, el Gobierno Civil de Valladolid comunicó a los solicitantes la denegación del permiso para la presentación del libro de Julián Ariza "Comisiones Obreras", que iba a tener lugar el lunes 18, a las ocho de la tarde, en el colegio mayor Monferrant.

El comunicado oficial hacía incapié en el articulado que regula el derecho de reunión, indicando, no obstante, que podían recurrir ante Gobernación en un plazo de quince días.

CC. OO. de Valladolid manifestó su extrañeza, aparte de que el libro está legalmente editado, porque en el actual momento, de gran confusión sindical, es más importante que nunca clarificar todas las alternativas.

UGT, que había solicitado permiso para presentar dos días después el libro sobre la Unión General de Trabajadores, también de editorial Avance, con la participación de Nicolás Redondo en el acto, manifestó que aun en el caso de ser autorizados, renunciaban a la presentación, como muestra de solidaridad con Comisiones Obreras, a la vez que protestaban enérgicamente contra la incoherencia política del Gobierno.

La Administración dijo sí, pero UGT mantuvo su promesa. Sin embargo, Nicolás Redondo estuvo en Valladolid, porque, aparte de la presentación del libro, tenía prevista una reunión con militantes y comité ejecutivo provincial. El señor Redondo aprobó la renuncia de sus compañeros. Al referirse en una rueda de prensa a la "marcha atrás" del ministro de Relaciones Sindicales dijo: "Nunca se puede

uno fiar de lo que diga un ministro. Desde luego, si nosotros sabemos que Enrique de la Mata iba a hablar a título personal, no hubiéramos dialogado con él".

A una pregunta sobre el ingreso en UGT de algunos miembros de Comisiones, Nicolás Redondo respondió que dado el gran crecimiento que la Unión esta viviendo en los últimos tiempos, el ingreso de algunos miembros de Comisiones no significa nada, máxime cuando los ingresos se hacen individualmente y no con carácter global.

El secretario general de UGT no aceptó la idea de una posible tolerancia del Gobierno para con ellos y declaró que las distintas organizaciones sindicales se mueven con idéntico nivel de "libertad". Jesús Mancho, también presente, recalcó: "Lo importante es el uso que se hace de esa tolerancia, y a nosotros nadie puede acusarnos de haber abusado de ella".

Como resumen de una semana de signo eminentemente sindical, la valoración que UGT hace del patrimonio que en esta provincia le fue confiscado en 1936. Aunque las investigaciones siguen, las cifras que se barajan oscilan alrededor de los 80 millones de pesetas. A 193 ascendían las casas del pueblo, y de ellas, la más importante, tanto en extensión como en edificación era la de la capital, en la actualidad propiedad del Ejército y sede de la Farmacia Militar. UGT, que continúa recopilando datos, está decidida a reivindicar su patrimonio y pretende que todos los bienes que en 1936 fueron confiscados a organizaciones y personas particulares les sean devueltos, dentro de una medida general en la que también se incluya a UGT. ■
MARIBEL RODICIO.